

LAS TRIBULACIONES DEL PRESIDENTE NIXON

LOS temas que habrán de abordarse en la fase que se considera definitiva están, en cualquier caso, muy lejos de justificar el optimismo. Israel sostiene que en ningún caso volverá a las fronteras de 1967 —anteriores a la conquista de territorio que se llamó «guerra de los seis días», a pesar de que existen textos mandatarios de las Naciones Unidas en ese sentido —como la famosa disposición 242 del Consejo de Seguridad—; están conformes en restituir una parte, pero solamente a cambio de algo. Ese algo son condiciones de seguridad para la existencia futura de su Estado. Por ejemplo: cedería gran parte de su conquista en la península del Sinaí bajo la condición de que este territorio fuese completamente desmilitarizado, dejando así un vacío entre Israel y Egipto. Pero no cedería Charm el Cheik, en la parte interior del Sinaí, sobre el mar Rojo, ni los pozos de petróleo de Abu Rodes, que le parecen vitales. Egipto pretende la recuperación entera de la península; aceptaría que se realizase en un plazo largo —una evacuación por etapas—, y la desmilitarización no del total, sino de algunas zonas. Por otra parte, relaciona esta evacuación del Sinaí con la del Golan, y pretende que todo se negocie a un mismo tiempo, para evitar dar la impresión de una paz por separado. Pero el Golan habría que negociarlo con Siria, y Siria no quiere asistirse a Ginebra porque considera que la conferencia es una tracción para el pueblo palestino. Israel estaría dispuesto al abandono parcial del Golan, pero no de las alturas, desde las que la artillería siria podría amenazar gran parte del territorio de Israel. Con respecto a Jerusalén, Israel no está dispuesto a volver a la situación anterior de partición de la ciudad ni a la concesión de un estatuto internacional; buscaría una forma de «municipalización» de Jerusalén, con una cierta autonomía, pero dentro de Israel. No es esta la posición de los países árabes en particular, y menos la de Arabia Saudita.

La cuestión palestina es, naturalmente, esencial. Israel pretende, pura y simplemente, que el pueblo palestino es una minoría étnica dentro del reino de Jordania: es un asunto, dicen, que los jordanos deben resolver entre sí. Si Jordania decide entregar una parte de su territorio a los palestinos para que formen un «nuevo» país, Israel no tendrá nada que objetar: excepto si ese nuevo país nace precisamente en sus fronteras, en cuyo caso será una continua fuente de incidentes y de intentos de conquista. Para los palestinos esta cuestión no es de recibo. Israel no existe: existe Palestina. Su deseo es simplemente la reconquista del territorio perdido en 1946 por la implantación de Israel. Aunque en las diversas organizaciones palestinas (algunas de las cuales han enviado representantes a Ginebra, aunque no para participar oficialmente en la conferencia, sino como observadores, por una parte; por otra, para presionar sobre los delegados árabes) predomina la idea de la desaparición definitiva de Israel para la construcción en su lugar de un Estado democrático y laico, en el que coexistan con igualdad de derechos judíos, árabes y cristianos. La justicia que hay en este plan no indica su posibilidad: puede considerarse como utópico en las actuales circunstancias. Pero es la bandera de lucha de los palestinos y de algunos árabes y no están dispuestos a abandonarla. El plan de Kissinger —suave, discretamente apoyado por la URSS, que deja a los Estados Unidos el papel de promotores— es el de llamar a referéndum a las poblaciones palestinas para que decidan la posibilidad de construir una nación propia en la Cisjordania, o, si prefieren, integrarse en Egipto o en Jordania. Este plan lo rechazan hasta ahora los israelíes, por la razón expuesta —no quieren frontera con los palestinos—, y los propios palestinos.

No se ve que las posiciones hayan variado mucho desde hace veinticinco años. Pero sí se advierte que en realidad todos los aspectos de la cuestión son negociables excepto uno: el de los palestinos. ¿Se les puede imponer una solución a la fuerza? Esta es una posibilidad invisible, pero que no deja de estar presente en la conferencia de Ginebra. Puede haber una respuesta palestina feroz. La ciudad de Ginebra está prácticamente movilizada, ante el temor de los actos desespeados, que podrían alcanzar la misma sede de la reunión. Pero tampoco está excluido que la respuesta venga de los mismos frentes actuales, y que en plena negociación de paz pudiese sobrevenir una nueva y gran batalla en Oriente Medio. Las consecuencias serían incalculables; y no para los contendientes sólo, sino para todo el mundo, que está sufriendo ahora las consecuencias de la última batalla.

La ofensiva contra Nixon comienza de nuevo, si es que ha cesado alguna vez: ha sido nombrado un presidente para el Comité judicial del Congreso que estudia la posibilidad de pronunciar el "impeachment" que obligaría al Presidente Nixon a abandonar su cargo en manos del vicepresidente, Gerald Ford. Se trata del republicano John M. Doar, antiguo ayudante del fiscal general. Su misión consiste en presidir el Comité cuando éste se reúna, y buscar información y pruebas —como un juez de instrucción— entre las reuniones del Comité para presentárselas a éste. Su personal consiste en más de cincuenta abogados, investigadores y personal administrativo. Su primera declaración ha sido para decir que calcula que en el mes de abril podrá presentar al Congreso los datos suficientes para que éste decida definitivamente en favor o en contra del Presidente, pero que no se comprometía en esa fecha: el desarrollo de la investigación podría llevarle a terminar su trabajo antes o después.

El funcionamiento de este Comité se considera ahora como básico para el buen funcionamiento del sistema en los Estados Unidos. Si el Congreso llega a declarar que no hay ningún motivo para el "impeachment", el Presidente podrá recuperar la confianza perdida. En esta cuestión, Nixon ha perdido algunos puntos con el nombramiento de Ford para la vicepresidencia. Si bien el nuevo vicepresidente le apoya de una manera ilimitada, y no pierde una sola ocasión de hablar en favor de su Presidente, el puesto que ha dejado vacante en la Cámara —el de jefe del grupo republicano— lo ha ocupado John J. Rhodes, que parece partidario decidido del "impeachment", y que incluso sugiere que el Presidente Nixon debería dimitir por su voluntad antes de que se produjese este acontecimiento que sería deshonoroso no sólo para la Casa Blanca, sino para el partido y para la nación en conjunto.

Simultáneamente, la inspección de impuestos —Internal Revenue Service— ha vuelto a

abrir el expediente de Nixon, que en el mes de junio había considerado como satisfactorio. Parece que desde entonces hasta ahora ha recibido nuevas informaciones o ha encontrado datos contradictorios. Algunos de estos datos han sido publicados por la prensa, y los investigadores de impuestos creen que deben examinarlos. Según el "Post", de Washington, el Presidente habría dejado de pagar al tesoro unos 13.000 dólares en los primeros cuatro años de su presidencia, utilizando para ello medios que considera fuera de la ley.

La tregua concedida a Nixon mientras se examinaba la candidatura de Ford para la vicepresidencia, parece haber terminado. Una vez instalado ya Gerald Ford, y de una manera satisfactoria para todos, el poder no quedaría vacante (o iría a parar a un demócrata, como es el "speaker" de la Cámara), y por lo tanto la sucesión constitucional está ahora garantizada.

De todas formas, el tiempo transcurrido parece haber favorecido al Presidente tanto en la opinión pública, como en la preparación de su defensa. Según ha dicho Ford, Nixon está a punto de hacer públicos unos documentos que pueden aclarar la honestidad de sus relaciones con los productores y distribuidores de leche (se le acusaba de haber subido los precios de la leche a cambio de una subvención) y con la ITT (que habría financiado su campaña electoral a cambio de ciertos beneficios). Según Ford, el Presidente actuó siempre en estos casos dentro de la más estricta legalidad.

En cualquier caso, lo peor que puede suceder —peor que el "impeachment"— es que Nixon se mantenga hasta 1976 sin que las circunstancias se aclaren, a favor o en contra: se ha visto ya claramente la repercusión en el exterior y en el interior del país de su situación de debilidad y acusación; al menos las crisis actuales se atribuyen a la posición de Nixon. En lo que está de acuerdo la mayoría de la opinión pública y de la opinión política, es en que el tema no puede prolongarse más.